EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio 2330/011, del 21 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 35, 37, 102, 306, 322, 2905 y adicionar un Capítulo III al Título Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 QUATER, 323 QUINTUS y 323 SEXTUS del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; reformar los artículos 942 y 948 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; reformar los artículos 10, 116 y 194 del Código Penal para el Estado de Colima; y reformar los artículos 16, 19 y 23 del Código Electoral del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

- La familia mexicana, como núcleo de la sociedad, es el principal elemento para el desarrollo del país. La familia es un espacio de naturaleza jerárquica el cual, de acuerdo a lo que se realice al interior de la misma, será reproducido hacia afuera, afectando de manera positiva o negativa a la comunidad, en ese sentido es importante reforzar a la familia en un ámbito de afectividad y solidaridad.
- Las familias transmiten a los miembros más jóvenes haberes, saberes y patrimonio pero, además, transmiten las pautas de relación que pueden ser consideradas como un recurso estratégico que tendrá un papel importante en el proceso de integración social de los mismos. Por esa razón, la calidad de la vida familiar puede ser un factor decisivo en los momentos en que las familias deben enfrentar situaciones de crisis tales como el desempleo, las enfermedades o la muerte, las separaciones y los divorcios. En espacios familiares cargados de conflictividad habrá costos de negociación más elevados y resultados menos satisfactorios en estas situaciones de crisis.
- Cuando el Juez, mediante una sentencia, obliga al pago mensual en dinero o en especie para satisfacer estas necesidades básicas, se le denomina pensión alimenticia. Para determinar la cuota mensual, la ley sigue el criterio de que los hijos deben tener un nivel de vida similar al de sus padres. Si ambos trabajan contribuyen en proporción a sus ingresos.
- Asimismo, en caso de que a los hijos les afecte alguna incapacidad física o mental que les impida sustentarse por sí mismos o por cualquier otra razón que el Juez considere indispensable para la subsistencia de los hijos e hijas. La obligación de

cumplir con los alimentos debe ser proporcional a las posibilidades de quien debe otorgarlos y a las necesidades de los acreedores. Ello en razón de que, si bien se trata de un derecho irrenunciable, la obligación no puede ir más allá de una realidad social, lo que es acorde al principio de certeza jurídica.

- Hablar de los alimentos en Derecho de Familia es referirse a los medios indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, esparcimiento, etc. La obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos, pero también puede ser de los hijos hacia sus padres si las circunstancias de justicia lo exigen.
- La necesidad de esta reforma se debe a que en el Estado de Colima el año pasado se registraron una importante cantidad de divorcios que se convirtieron litigios por falta de incumplimiento de pensión alimenticia. La actual legislación al respecto indica no aplica mayor sanción que la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de esta obligación.
- Los alimentos se tratan de un derecho irrenunciable. Los alimentos son una obligación legal y social reconocida, por esto mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir este derecho, protegiendo un bien jurídico del interés superior del menor. En virtud, de lo anterior es que se propone crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima (REDAM), mismo que operará el Registro Civil y tendrá la base de datos de los deudores alimentarios del Estado.
- Con el argumento insolvencia económica muchos padres no cumplen con esa responsabilidad de dar alimentos; y otros tantos utilizan documentos con información falsa como recibos de pago y nóminas, para así, evitar la obligación de pagar alimentos o disminuir el monto de la pensión alimenticia que el juez fija, dejándolo en la mayoría de las ocasiones en cantidades ridículas.
- En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15 se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. En este tenor de ideas el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 señala los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación.
- Dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. En ella se establece, entre otras cosas, que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

- Asimismo, reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, estableciendo la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. Dicha Convención, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los criterios emitidos por nuestros tribunales más especializados, es reconocida como Ley Suprema de la Nación.
- Por su parte la propia Constitución Política, en su artículo 4 prevé que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
- El deudor alimentario, es aquella persona física que tiene la obligación de proporcionar los alimentos, la cual no sólo abarca cubrir necesidades vitales o precarias, sino de solventar una vida decorosa, sin lujos pero suficiente para desenvolverse en las condiciones económicas a las que estaba acostumbrado el acreedor. Los alimentos son un derecho objetivo y la facultad ya atribuida por la norma es precisamente el derecho subjetivo a reclamarse.
- Es menester sensibilizar a todos los ciudadanos sobre la importancia y enorme privilegio que implica ser padre con todos sus derechos y obligaciones. Por lo anterior, es necesario modificar y crear una legislación más eficiente y acorde con los tiempos que estamos viviendo, en apoyo a esta iniciativa ciudadana. Para tal fin se propone: establecer la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), mismo que se integrará con los nombres de quienes tengan la obligación y que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia. Esa lista sería integrada para su publicación en internet, por una orden del juez familiar, civil o penal que tenga en sus manos el caso del incumplimiento de esa pensión. Se pretende que el historial del deudor sea consultado por diferentes entidades de la sociedad como organizaciones financieras, empresas privadas o públicas. De conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estado de Colima y a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Colima.
- Nuestro país México y en especial el Estado de Colima, se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia en cuanto a ordenes legislativo y normativos, que regulen la sociedad y su convivencia, y es por ello que no podemos pasar por alto que en varios países latinoamericanos se están tomando medidas al respecto, algunos de los cuales se mencionan a continuación: como Argentina se cuenta con leyes provinciales como en Santa Fe, Mendoza, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Perú con la Ley N° 28970, mientras que en Uruguay con la Ley N° 17957, actualmente ya opera el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

(REDAM). Es importante señalar también que existe una iniciativa similar que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

- El Registro de Deudores Alimentarios Morosos funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

TERCERO.- Que mediante oficio 2720/011, de fecha 25 de Octubre de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar los artículos 116 y 194, crear el CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TÍTULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima.

CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de nuestro país, en su artículo 4º tutela y garantiza el derecho fundamental que tienen todos los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así mismo, confiere el deber para sus ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y al Estado, la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y de otorgar todas las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
- En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del Niño, ordenamiento internacional suscrito por nuestro país, fija la obligación a los Estados Parte, para que los niños y niñas gocen de una protección especial, y dispongan de oportunidades y servicios, para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal.
- En ese tenor, es necesario que nuestra legislación tanto federal, como local, cuenten con las disposiciones legales suficientes y adecuadas para procurar, en lo máximo de lo posible, la integridad física y mental de la niñez, con el fin de lograr su desarrollo pleno e integral.
- Asimismo, nuestra Constitución Local, en la fracción I de su artículo 1º, establece que la familia constituye la base fundamental de la sociedad, y que el estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y,

particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades.

- En tal virtud, el derecho a recibir alimentos se reviste de gran importancia, pues constituye un elemento vital para el desarrollo de la vida y de las capacidades físicas y mentales de los niños y las niñas, así como de todas aquellas personas integrantes de la familia que se encuentran en la necesidad de recibirlos, ya que este derecho es de carácter indispensable para satisfacer todas sus necesidades básicas, como trascendental para el ejercicio y disfrute de sus demás derechos, por tanto, carecer de éste atenta contra la integridad de la salud y de la vida misma.
- Con el afán de garantizar este valioso derecho, el Código Civil de nuestra entidad, en su capítulo denominado “De los Alimentos”, contiene las disposiciones legales que prevén los derechos de las personas que deben recibirlos, así como la obligación de quienes deben otorgarlos, los rubros que comprenden los alimentos y la forma de cumplir con esta obligación. Es importante destacar que el artículo 318 perteneciente a este apartado del Código Civil, señala que los alimentos, no sólo comprenden la comida, sino también el vestido, la habitación y la atención médica, los gastos para la educación con el fin de proporcionar algún oficio, arte o profesión adecuados, lo necesario para lograr, en lo posible, la habilitación o rehabilitación y su desarrollo en relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, y por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, la incorporación a la familia.
- Por su parte, el Código Penal, mediante el delito de Omisión de Cuidado tipificado en el artículo 194, sanciona a la persona que no cumple con sus deberes de cuidado respecto a su cónyuge, menores hijos o de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, igualmente, se sanciona, con el delito de Fraude en el artículo 232, al que renuncie a su trabajo para no pagar la pensión a favor de los acreedores alimentistas y, al que se conduzca con falsedad u oculte la verdad ante autoridad judicial en procedimientos que versen sobre alimentos, mediante el delito de Falsedad ante la Autoridad tipificado por el artículo 116.
- Sin embargo, es necesario realizar una reforma integral, completa y factible, que nos permita contar con una legislación que se encuentre a la vanguardia en esta materia y, que sea capaz de responder cabalmente a las exigencias de una sociedad cambiante que requiere de instrumentos jurídicos que garanticen la satisfacción de sus necesidades.
- Por este motivo, se propone reformar el Código Civil, mediante la adición del artículo 315 Bis, con el fin de otorgar la facultad a toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén obligados a proporcionarlos, para solicitar la intervención del Ministerio Público o el Juez de lo Familiar de manera indistinta, para que en uso de sus facultades resuelvan lo que en derecho corresponda, con esta disposición

se pretende, en virtud de la trascendencia de este derecho y de su carácter social, que toda persona pueda pedir la intervención del Estado para que se garantice el otorgamiento de los alimentos a aquellas personas que tengan la necesidad de recibirlos y que por alguna circunstancia se encuentren impedidos para exigirlos por su propio derecho, medida que muy seguramente coadyuvara en el cumplimiento de esta obligación.

- Por estas razones, se propone crear un capítulo específico, en el que se concentren y perfeccionen las conductas ilegales referentes al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, se introduzcan figuras jurídico-penales novedosas y adecuadas para inhibir estas conductas y se establezca uniformidad y proporcionalidad en cuanto a las penas aplicables a las mismas, y se deroguen los tipos penales vigente en el Código Penal relativos a sancionar estas conductas.
- En tal virtud, se pretende establecer en el Código Penal un nuevo capítulo denominado “Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias”, mediante la adición del artículo 167 Bis, en el que se prevé un delito con los elementos bien identificados y suficientes para sancionar de manera adecuada a quien no cumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, fijando para el responsable de realizar esta conducta una pena proporcional, consistente en seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por cien unidades, así mismo, se destaca como pena adicional y figura novedosa que se propone introducir al Código Penal, la suspensión o pérdida de los derechos de familia, en el entendido, de que si no se otorga la pensión alimenticia, el responsable de la omisión tampoco debe contar con los derechos inherentes a la familia como son, la patria potestad, la custodia, y el derecho a la convivencia, entre otros.
- En este mismo tipo penal, se incluye como agravante de pena, el supuesto en el que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, aumentándose las penas en una mitad, ya que siendo de esta manera, el responsable incurriría en el incumplimiento de su obligación, y en el desacato de una resolución judicial.
- Asimismo, se propone adicionar el artículo 167 Bis 1, con el fin de modificar los elementos del delito que se encuentra actualmente tipificado como fraude equiparado por la fracción III del artículo 233, para no sólo sancionar al que renuncie a su trabajo con la intención de eludir la obligación de pagar la pensión a favor de los acreedores alimentarios como actualmente se encuentra tipificado en el numeral mencionado, sino también sancionar a aquellas personas que soliciten licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio por el que obtenga ingresos o se coloque en estado de insolvencia para no cumplir con su obligación, imponiéndose para el responsable de estas conductas de seis meses a cuatro años de prisión y multa de hasta cien unidades, suspensión o pérdida de los derechos de familia y, pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente, previéndose también como agravante de pena, el

supuesto en el que estas conductas se realicen incumpliendo una resolución judicial.

- Por otra parte, además de sancionar al responsable del incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, es preciso perfeccionar, mediante la adición del artículo 167 bis 2, la redacción y los elementos de la conducta ilícita que actualmente se encuentra tipificada como falsedad ante la autoridad en materia de alimentos, por el artículo 116 del Código Penal, con el fin de castigar debidamente a las personas que incumplan con la orden judicial de proporcionar informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, o haciéndolo no los realicen dentro del término ordenado u omitan realizar de inmediato el descuento correspondiente, imponiéndoseles pena de seis meses a tres años de prisión y de doscientos días multa.
- Igualmente, se establece, por medio de la adición del artículo 167 Bis 3, que la persona legitimada para otorgar el perdón en estos delitos, sólo procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue (deposite) a favor del acreedor alimentario garantía suficiente a juicio del juez o del ministerio público, de que en lo sucesivo cumplirá con sus deberes alimentarios, con esta disposición legal, que sin duda representa uno de los puntos a destacar en la presente iniciativa, se busca obligar al deudor alimentario, por una parte, a que cumpla con las cantidades que deba al acreedor alimentario y, principalmente, que garantice el cumplimiento futuro de su obligación procurando así el bienestar del acreedor, para lo cual deberá depositar a juicio del juez o del ministerio público cantidad suficiente a favor de este, para poder recibir el perdón y librarse de la represalia punitiva del Estado.
- Finalmente, y con la intención de armonizar la reforma que se proponen al Código Civil, relativa a otorgar a toda persona la facultad para pedir la intervención del Estado con la finalidad de que se garantice el otorgamiento de los alimentos, con las que se proponen al Código Penal, se establece que los delitos que se adicionan a este último ordenamiento legal, se perseguirán por querrela cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario, y por oficio cuando el sujeto pasivo del abandono sea cualquiera otra persona respecto de quien el activo mantenga la obligación de proporcionar alimentos, con el objeto de que cualquier persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos pueda denunciar esta situación, para que este organismo público inicie con las averiguaciones correspondientes a fin de garantizar el otorgamiento de los alimentos.

QUINTO.- Que mediante oficio 2722/011, de fecha 25 de Octubre de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción VI del artículo 282, y reformar los artículos 303 y 311 bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima.

SEXTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que:

- Es tarea prioritaria de todo Estado la procuración de la subsistencia de los miembros que lo conforman. El Estado Mexicano tradicionalmente ha cumplido con la misión de procurar la subsistencia de todos los miembros de la sociedad principalmente de dos formas: de manera directa a través de un sistema de seguridad social y de la dispersión de apoyos presupuestales apoyado por él y, de manera indirecta, a través de la confección de normas destinadas al reconocimiento y reforzamiento de las obligaciones de solidaridad entre los miembros de la colectividad.
- El derecho de alimentos, entendido éste como el derecho que tiene una persona llamada acreedor alimentario de demandar de otra, llamada deudor alimentario, que se le proporcionen los medios económicos para su subsistencia y desarrollo, es expresión del sentimiento de solidaridad que generalmente impera entre los miembros de las familias. Los alimentos, así, constituyen una exigencia moral que históricamente ha sido reforzada dentro de los sistemas jurídicos otorgándole al acreedor, o a un conjunto de ellos, una acción civil para demandar el cumplimiento de dicha obligación emergida por razón del parentesco o de algún acto del estado civil.
- El concepto jurídico de alimentos, (del lat. alimentum, que significa comida o sustento), no se encuentra limitado únicamente a la satisfacción de las necesidades nutricionales del acreedor sino que, además, comprende el vestido, la habitación, la atención médico quirúrgica y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación encaminados a proporcionarles un arte, oficio o profesión, adecuados a sus circunstancias personales.
- Siendo una obligación ceñida por el criterio de proporcionalidad, su monto es determinable en cada relación concreta, en función de las características propias del deudor y del acreedor. Atendiendo particularmente a las posibilidades económicas del primero y las necesidades del segundo, la institución permite al ser humano, que no puede proveer a su subsistencia por sí mismo, obtener su sustento en los aspectos biológico, social, moral y jurídico. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, razón por la cual, entre otros efectos, es improcedente conceder la suspensión contra el pago, ya que se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia; como tampoco, dada su importancia, es posible aceptar que la obligación del deudor alimentario sea cumplida parcialmente.
- La institución de los alimentos representa el más sólido pilar en materia de solidaridad y justicia, sin embargo, hoy en día, no se ha acotado la protección jurídica que mujer en cinta tiene para percibirlos, con independencia de que se

encuentren casadas, solteras o sean menores de edad; la mujer embarazada tiene derecho desde la concepción a que se le proporcionen alimentos, salud, vivienda, atención al parto por lo que debe de opera a su favor la presunción iuris et de iure para percibirlos.

- Adicionalmente y en reconocimiento de la obligación que atañe al Estado de garantizar el normal desarrollo de los niños, reconociendo que la amenaza de sustracción de los hijos es una forma de ejercicio de violencia frecuentemente ejercida por los padres en agravio de las madres, se establece a favor de estas últimas el derecho preferente para la guarda y custodia de sus menores hijos, hasta los doce años de edad, salvo que importe un peligro para el menor. Es decir, sin más excepciones que las que se relacionan con el interés superior del niño.

SÉPTIMO.- El interés superior de las niñas y los niños implica un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible, como criterios rectores para la elaboración de normas.

En ese tenor, el derecho de la niñez a recibir alimentos adquiere gran relevancia, pues es través de éste, que se les dota de los medios necesarios e indispensables para satisfacer sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la alimentación, además de la habitación, el vestido, la educación y la asistencia médica en casos de enfermedad, atento a que por sus propias características no se encuentran en posibilidad de proporcionarse sus propios satisfactores, con lo que se tutela así su pleno desarrollo tanto físico como mental.

De lo anterior, se desprende la obligación para el Estado de crear las normas y medidas necesarias para tutelar y garantizar de manera eficiente y directa el interés superior de la niñez, en este entendido, la Comisión que dictamina después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas que en este acto se dictaminan de manera conjunta, en razón de que proponen medularmente reformas en materia de alimentos, tiene las siguientes consideraciones:

A) En relación con la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 35, 37, 102, 306, 322, 2905 y adicionar un Capítulo III, al Título Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 QUATER, 323 QUINTUS Y 323 SEXTUS del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; reformar los artículos 942 y 948 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; reformar los artículos 10, 116 y 194 del Código Penal para le Estado de Colima; y reformar los artículos 16, 19 y 23 del Código Electoral del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora considera trascendental que existan los medios y garantías suficientes para proteger y asegurar el interés superior de los menores, como lo es en este caso, el derecho a percibir alimentos, pero estima inviable, así como inconveniente para una debida, pronta y eficaz impartición de justicia, la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima.

El derecho de recibir alimentos al ser de orden público y de carácter urgente en virtud de los intereses que tutela, al involucrar la integridad y el desarrollo de los menores, precisa de una impartición de justicia pronta, es decir, se debe contar con procedimientos ágiles que tiendan a resolver de manera expedita sobre el monto de la pensión alimenticia provisional y, en su caso, la definitiva, que se deben dar al acreedor alimentario con el fin de proteger su subsistencia, en tal virtud, la Comisión que dictamina no estima procedente ni benéfico la aprobación de la iniciativa en estudio, pues con la misma se entorpecería la impartición de justicia en esta materia, ya que por un lado, el iniciador pretende que los jueces y tribunales de lo Familiar den aviso al Registro Civil, de manera oficiosa, de las personas que no paguen en tiempo y forma la pensión provisional o definitiva y sean ingresados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a través de la adición del artículo 322 BIS al Código Civil, sin embargo, en la misma iniciativa no se establece en ningún apartado, el procedimiento que deberán llevar a cabo los citados funcionarios públicos para dar este aviso, lo que provocaría disparidad de criterios y una laguna jurídica, al no fijar la forma en que se deberá notificar al Registro Civil de la resolución de incumplimiento.

Aunado a lo anterior, las controversias del orden familiar, y en la especie, los juicios de pensión alimenticia, son altamente substanciados ante el Poder Judicial de nuestro Estado, pues la omisión, por parte de los obligados, al pago de la pensión alimenticia, es una constante en nuestra sociedad, por lo que no es conveniente saturar el debido proceder de los juicios de pensión alimenticia, estableciendo una carga procesal más para los funcionarios que imparten justicia, al estar obligados a realizar, sin procedimiento preestablecido en la ley, el aviso de incumplimiento del pago de pensión alimenticia al Registro Civil, pues lo que realmente se necesita es contar con procedimientos ágiles y sin dilatación alguna, que permitan de la manera pronta la fijación de la pensión alimenticia provisional, y en su caso, la definitiva, dado que es de mayor trascendencia e interés para el menor, que se dicten estas resoluciones que garantizan de manera coercitiva y eficaz el cumplimiento de esta obligación, que el destinar tiempo y recursos personales para dar aviso al Registro Civil de los deudores alimentarios que no cumplen con su obligación e ingresar sus datos al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, cuya finalidad si bien es noble, no tiene un beneficio directo, efectivo y real para el acreedor alimentario.

Por su parte, en este tipo de controversias, tratándose de alimentos provisionales y debido a la celeridad que debe de existir en esta clase de juicios, el juez tiene la facultad para fijar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio por sentencia definitiva, en este tenor, esta Comisión dictaminadora considera que establecer que el juez, en esta etapa procesal, dé aviso al Registro Civil con el fin de llevar a cabo el ingreso del deudor alimentario al mencionado Registro, como lo propone el iniciador con la reforma al artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles, no es para nada conveniente en aras de asegurar el acatamiento y cumplimiento de su resolución, pues con esta medida se podría provocar que una mayor cantidad de deudores alimentarios promuevan recursos legales en contra de esta resolución interlocutoria, alegando violaciones a su derecho de audiencia, con lo que se vería afectado el acceso al derecho de recibir alimentos por parte de los acreedores alimentarios.

Asimismo, en cuanto al apartado en el que se propone que la cancelación del o los avisos que se hayan dado al Registro Civil, respecto de los deudores alimentarios morosos, se tramite por vía incidental, la Comisión que dictamina estima que al ser de este modo, se estaría saturando aún más la carga de trabajo de los juzgados en materia familiar, dado que un incidente está compuesto por la presentación de una demanda incidental, el emplazamiento a la parte contraria, ofrecimiento y desahogo de pruebas, formulación de alegatos verbales o por escrito, y emisión de sentencia interlocutoria, lo que implica todo un procedimiento jurisdiccional para resolver una situación, que si bien, sería importante para el deudor alimentario, no lo sería así para el acreedor, destinando a este procedimiento tiempo efectivo por parte de la estructura del Poder Judicial que bien podría ser utilizado para resolver situaciones de mayor trascendencia, como lo es la fijación de las pensiones alimenticias provisionales o definitivas.

Finalmente, con relación a las reformas propuesta por el iniciador al Código Penal, esta Comisión dictaminadora considera improcedente incluir el tipo de Omisión de Cuidado, en lo relativo al incumplimiento de los deberes alimentarios, dentro del catálogo de delitos graves previstos por el artículo 10 del Código Penal, pues de aceptarse esta propuesta, el deudor alimentario acusado no tendría derecho de ser puesto en libertad provisional bajo caución, como lo establecen los artículos 130, fracción I y 134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo tanto, se le estaría obligando a llevar su procedimiento penal en prisión y, en tal virtud, lo que la legislación privilegiaría sería la pena corporal en contra de los deudores alimentarios y no así el interés superior de la niñez, toda vez que de ser sancionados aquellos, se complicaría la realización y cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en perjuicio de la integridad física y psicológica de los menores.

En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión que dictamina consideran que las conductas consideradas como delitos y sus respectivas sanciones penales en materia de deberes alimentarios, son efectivas y han logrado su teleología en la forma en que actualmente se encuentran vigentes, es decir, sancionan de manera proporcional y adecuada a los responsables de estas conductas, por lo que no se supone la necesidad de variar los elementos de estos delitos, ni aumentar las penas para estas conductas ilícitas como lo pretende hacer el iniciador, pues esta propuesta de reforma, no representa ningún beneficio directo para el interés superior de los menores, sino por el contrario, hace más complicada la realización y cumplimiento de los deberes alimenticios por parte de los deudores.

En este sentido, se estiman improcedentes las reformas propuestas por el iniciador a los artículos 10, en razón de los argumentos esgrimidos en supralíneas, al 116, dado que con la conducta vigente en ese numeral ya se sanciona actualmente a las personas que se conducen con falsedad u ocultan la verdad ante la autoridad judicial, con una pena proporcional de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta de 45 unidades, y al 194 en virtud de que igualmente ya se encuentra tipificada la omisión en el cumplimiento de los deberes alimentarios y sancionada con una pena corporal de tres días a tres años de prisión y multa hasta por treinta unidades, todos estos artículos del Código Penal.

Por los argumentos expresados, y por no encontrar un beneficio directo y efectivo al interés superior de los niños y niñas de nuestro Estado, esta Comisión que dictamina no considera viable, ni procedente la iniciativa en estudio, pues en el supuesto de aprobar la misma, se incurriría en el entorpecimiento de la impartición de justicia y en el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos.

B) En relación con la segunda de las iniciativas, relativa a reformar el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar los artículos 116 y 194, crear el CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TÍTULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora coincide en los siguientes aspectos con el iniciador.

Es un hecho que la legislación penal vigente establece como delitos una serie de conductas relacionadas con el incumplimiento de los deberes alimenticios, los cuales se encuentran dispersos en el Código Penal como lo demuestran los artículos 116, 194 y 233, fracción III, que tipifican respectivamente las conductas antijurídicas relacionadas con la falsedad ante la autoridad, el incumplimiento de los deberes de cuidado respecto al cónyuge, menores hijos, o de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, y el fraude equiparado con relación a la renuncia al trabajo para eludir la obligación de pagar la pensión a favor de los acreedores alimentistas, por lo que es inconcuso la necesidad de unificar estas conductas en un mismo capítulo, con el fin de dotar de uniformidad y congruencia al Código Penal en materia de alimentos como debidamente lo propone el iniciador, mediante la creación del CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TÍTULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO del citado ordenamiento penal, con lo que se pretende, asimismo, facilitar la labor del que imparte justicia, aglomerando en un solo apartado, todas estas conductas que versan sobre la misma materia en común.

No obstante lo anterior, en congruencia con el criterio emitido por esta Comisión en el inciso A) del presente Considerando, es procedente privilegiar las conductas que ya se encuentran tipificadas en materia de deberes alimenticios y, en su caso, mejorar los elementos de estos tipos penales, sin alterar su esencia y objetivos, así como mantener sus respectivas sanciones, que se encuentran vigentes en el Código Penal, por lo tanto, se adicionan al capítulo citado en el párrafo anterior, los siguientes artículos:

Artículo 167 Bis, que tipifica como delito el incumplimiento de las obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, y la imposición de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades;

Artículo 167 Bis 1, que establece la conducta ilícita relativa a la renuncia del trabajo para eludir la obligación de pagar la pensión a favor de los acreedores alimentistas, sancionada con prisión de seis meses a ocho años y multa hasta por 85 unidades; y

Artículo 167 Bis 2, que tipifica la conducta de aquellas personas obligadas por la autoridad judicial competente a proporcionar informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, que incumplan con la orden judicial de hacerlo u omitan realizar el descuento correspondiente por dos ocasiones consecutivas, y la sanción de uno a cinco años de prisión y multa hasta por 60 unidades.

Por su parte, esta Comisión que dictamina no estima procedente la adición del artículo 315 Bis al Código Civil y su correlativo artículo 167 Bis 4 al Código Penal, propuestos en la iniciativa en estudio, en virtud de la naturaleza de los derechos en cuestión, pues sólo corresponde la exigencia de éstos a sus titulares, es decir, a los menores de edad o los incapaces para valerse por si mismo, a través de sus representantes legítimos o tutores designados y a los mayores de edad, cónyuge o concubina por su propio derecho.

C) En cuanto a la tercera de las iniciativas, relativa a reformar la fracción VI del artículo 282, y reformar los artículos 303 y 311 bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora coincide con la intención del iniciador de garantizar el interés superior de los niños.

En este sentido, la reforma a la fracción VI del artículo 282, se considera viable y benéfica para el normal desarrollo de los niños, pues con ello, se pretende establecer que el juez designe a una persona que se haga cargo de los hijos, mientras se desarrolla el procedimiento de divorcio, tomando en cuenta previamente las circunstancias específicas, posibilidades y capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al interés superior de los hijos sea más conveniente para éstos, siempre que no exista común acuerdo entre los cónyuges.

Asimismo, se destaca la intención de los iniciadores de disponer que en tratándose de menores de doce años, estos deban quedarse provisionalmente al cuidado de la madre, siempre y cuando no exista peligro para el desarrollo de los hijos con el fin de garantizar su desarrollo físico y mental, lo anterior, toda vez que los menores de doce años de edad por identidad y por sus necesidades más apremiantes mantienen una estrecha vinculación e identificación con la mamá, tal y como también se prevé esa preferencia en el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles vigente el Estado.

Con relación a la reforma de los artículos 303 y 311 Bis, en los que se pretende establecer la presunción de necesidad de alimentos para la mujer embarazada, surgen los siguientes supuestos:

1. La mujer que se embaraza durante el matrimonio;
2. La mujer que se embaraza y se encuentra en concubinato; y
3. La mujer que se embaraza, pero que no se encuentra unida bajo ninguna relación reconocida por el Código Civil.

En los dos primeros supuestos, se estima innecesario que se establezca tal presunción, debido a que el propio artículo 311 vigente ya la considera, al señalar que el cónyuge o

concubina que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos, derivado precisamente del matrimonio o del concubinato respectivamente.

Ahora, en cuanto al tercero de los supuestos, esta Comisión dictaminadora considera que fijar la presunción de necesitar alimentos para la mujer embarazada, no da solución a esta problemática, ya que al ser de este modo, representaría complicaciones al acreditar la paternidad y poder así exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias al deudor, pues al existir la negativa de éste para cumplir con su presunto deber alimentario, se deberá substanciar previamente un juicio de reconocimiento de paternidad durante el embarazo de la mujer, lo que se considera inapropiado para el sano y pleno desarrollo del producto.

Finalmente, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión que dictamina considera necesario reformar el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, toda vez que se requiere dicha reforma para guardar congruencia con el criterio adoptado en la modificación que se propone al artículo 282 del Código Civil del Estado, respecto de la preferencia de custodia de la mamá sobre el padre, esto, siempre que no exista peligro para el normal desarrollo de los hijos.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente

D E C R E T O No. 441

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a los artículos 116 y 194, así como la creación del CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TÍTULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1 y 167 Bis 2, además de derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 116.- Al que ante autoridad judicial se conduzca con falsedad u oculte la verdad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por 45 unidades.

Si se retracta de su declaración falsa antes de que se pronuncie resolución, la pena será hasta dos años de prisión y multa hasta por 20 unidades.

ARTÍCULO 194.- Al que abandone a quien hubiese atropellado con un vehículo, se le impondrán de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades.

CAPITULO V INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 167 Bis.- Al que no cumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, se le impondrá de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades.

Procederá declarar extinguida la acción o las sanciones penales, cuando el inculpado antes de sentencia que cause ejecutoria, satisfaga voluntariamente las prestaciones debidas.

ARTÍCULO 167 Bis 1.- Al que renuncie a su empleo o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta por 85 unidades

Para los efectos del párrafo anterior se presume que el deudor alimentista elude su obligación, cuando éste no garantice su cumplimiento.

ARTÍCULO 167 Bis 2.- Toda persona obligada por la autoridad judicial competente a proporcionar informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, que incumplan con la orden judicial de hacerlo, lo realicen falsamente u omitan realizar el descuento correspondiente por dos ocasiones consecutivas, se les impondrá de uno a cinco años de prisión y multa hasta por 60 unidades.

ARTÍCULO 233.-

De la I a la II.-.....

III.- (DEROGADA)

De la IV a la VII.-

.....

ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la fracción VI, del artículo 282, del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ART. 282.-

I a la V.-.....

VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieran designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá lo conducente, tomando en cuenta las circunstancias específicas, posibilidades y capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al interés superior de los hijos sea más conveniente para éstos, con la obligación del que tiene la custodia de permitir la convivencia con el otro progenitor o progenitores, si es el caso. Salvo que exista peligro para el normal desarrollo de los hijos, los menores de doce años deberán quedar provisionalmente al cuidado de la madre.

VII.-.....

ARTÍCULO TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma al artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 212.- Si hubiere hijos menores de edad, serán puestos al cuidado de la persona que de común acuerdo los cónyuges hubieren designado. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá provisionalmente, debiendo en todo caso quedar al cuidado de la madre los hijos menores de 12 años.

.....

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil once.

**C. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA
DIPUTADA PRESIDENTA**

**C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA
DIPUTADA SECRETARIA**

**LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE
DIPUTADO SECRETARIO**